

INFORME DE PONENCIA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY 224 DE 2012 SENADO.

por la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones.

Doctor

BERNARDO MIGUEL ELÍAS VIDAL

Presidente

Comisión Tercera Constitucional Permanente

Senado de la República

Ciudad

Referencia: Informe de ponencia para segundo debate Senado del Proyecto de ley número 224 de 2012 Senado, 019 de 2011 Cámara, *por la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones.*

Síntesis del proyecto

El proyecto de ley que se somete a consideración para segundo debate ante la honorable Plenaria del Senado de la República tiene como finalidad la derogatoria de la actual normativa relacionada con el arancel judicial prevista en la Ley 1394 de 2010 y en su lugar, expedir una nueva ley que regule esta materia.

Con esta iniciativa se pretende, fundamentalmente, hacerle frente a las dificultades que de orden práctico, se han presentado en la aplicación de la Ley 1394 de 2010, con el fin de contribuir al fortalecimiento del procedimiento de recaudo del arancel judicial.

Trámite del proyecto

Origen: Ministerio de Justicia y del Derecho (antes Ministerio del Interior y de Justicia).

Primer Debate Cámara: El proyecto de ley fue aprobado en primer debate por la Comisión Tercera Constitucional de la honorable Cámara de Representantes el 4 de octubre de 2011.

Segundo Debate Cámara: El proyecto de ley fue aprobado en segundo debate por la Plenaria de la honorable Cámara de Representantes el 21 de marzo de 2012.

Primer Debate Senado: El proyecto de ley fue aprobado en primer debate Senado por la Comisión Tercera Constitucional del honorable Senado de la República el 16 de mayo de 2012.

Estructura del proyecto

El proyecto de ley consta de la siguiente estructura:

Artículo 1°. <i>Gratuidad de la justicia.</i>	Ratifica el principio general de gratuidad a la justicia, con la posibilidad de establecer, entre otros, aranceles judiciales.
Artículo 2°. <i>Naturaleza jurídica.</i>	Define la naturaleza jurídica del arancel judicial como contribución parafiscal.
Artículo 3°. <i>Sujeto activo.</i>	Establece como sujeto activo del arancel judicial al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o quien haga sus veces.
Artículo 4°. <i>Hecho generador.</i>	Define el hecho generador del arancel judicial (procesos judiciales con pretensiones dinerarias).
Artículo 5°. <i>Excepciones.</i>	Establece algunas excepciones para sujetos pasivos, tanto por factores objetivos (la naturaleza del proceso) como por factores subjetivos.
Artículo 6°. <i>Sujeto pasivo.</i>	Define como sujeto pasivo al demandante inicial y al demandante en reconvencción (cuando sea el caso), así como todo aquel que formule pretensiones dinerarias.
Artículo 7°. <i>Base gravable.</i>	Sienta las bases para el cálculo de la base gravable del arancel judicial.
Artículo 8°. <i>Tarifa.</i>	Establece la tarifa del arancel judicial en el 1.5% de la base gravable.
Artículo 9°. <i>Pago.</i>	Establece las reglas para el pago de la contribución parafiscal.
Artículo 10. <i>Falta disciplinaria.</i>	Contempla el principio de no discriminación de procesos judiciales por razón de la causación y pago del arancel judicial.
Artículo 11. <i>Destinación, vigencia y recaudo.</i>	Define cuál debe ser la destinación de los recursos obtenidos como consecuencia del recaudo del arancel judicial.
Artículo 12. <i>Seguimiento.</i>	Estipula la forma como se le hará seguimiento al recaudo y destinación de los recursos obtenidos del arancel judicial.
Artículo 13. <i>Régimen de</i>	Define el régimen de transición aplicable a las demandas presentadas con anterioridad a la entrada en

<i>transición.</i>	vigencia de la ley.
Artículo 14. Vigencia y derogatorias.	Regula el momento a partir de la cual empieza a regir la ley y las derogatorias.

Comentarios de los ponentes

A. Situación actual de la Administración de Justicia

La difícil situación por la que atraviesa la Administración de Justicia es, en la actualidad, uno de los temas de mayor trascendencia para el país. La preocupante congestión de los despachos judiciales, así como la lentitud en la solución de las diferentes controversias que se someten a la decisión de la Administración de Justicia, constituyen los principales problemas de la rama judicial.

En efecto, en la justificación del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional, se describen algunos índices y situaciones que dan cuenta del estado actual de la Administración de Justicia en el país. Veamos:

¿ El inventario de procesos pendientes para ser decididos por la Rama Judicial, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Consejo Superior de la Judicatura, para el mes de diciembre de 2010, asciende a dos millones seiscientos cuarenta y nueve mil (2.649.000)^{1[1][1]}. Esta cifra da cuenta de la evidente congestión presente en los despachos judiciales del país.

¿ Frente a la celeridad para resolver las controversias sometidas a decisión de los jueces de la República, las cifras y estadísticas son francamente alarmantes. Por ejemplo, de acuerdo con información suministrada por Asobancaria, un proceso ejecutivo hipotecario tarda en promedio seis punto seis (6.6) años, existiendo casos en los que dichos procesos pueden durar hasta diez (10) años.

¿ Por otro lado, índices internacionales muestran un evidente rezago de Colombia en lo que tiene que ver con la resolución de controversias, tanto a nivel mundial como comparativamente con países de la región o, incluso, con un nivel de desarrollo inferior al nuestro. Así, como se mencionó en la Justificación del proyecto presentado por el Gobierno Nacional, de acuerdo con el estudio *¿Doing Business 2011¿* elaborado por las Naciones Unidas, en lo que tiene que ver con el sub *¿sub-indicador de celeridad*, Colombia tarda 1.346 días en ponerle a fin una típica controversia relacionada con la resolución de un contrato de compraventa de mercancías. Tal situación ubica a Colombia en *¿el puesto 1782[2][2] entre 183 países, superando solamente a India (1.420 días), Bangladesh (1.442 días), Guatemala (1.459 días),*

^{1[1] [1]} Actualizando esta cifra para el año 2011, el resultado es de 2.491.714

^{2[2][2]} De acuerdo con el informe *¿Doing Business 2012¿*, el país ganó un puesto en este subindicador, pero no porque nuestro país haya tenido una mejora en este subindicador, sino porque otros países empeoraron su desempeño en materia de celeridad. Hoy Colombia se ubica en el puesto número 177.

Afganistán (1.642 días) y Surinam (1.715 días). Es decir, para el ¿Doing Business 2011¿ la colombiana es la sexta justicia más lenta del mundo y la tercera justicia más lenta de América Latina y del Caribe. Todos los países africanos examinados, por ejemplo, administran justicia de manera más célere que Colombia en la resolución de la controversia comercial tipo que atrás se mencionó¿. Incluso, Colombia tarda el doble del promedio latinoamericano y el doble del promedio africano.

En el ¿Doing Business 2012¿, Colombia avanza un puesto y se convierte en la séptima justicia más lenta del mundo, y sigue perdiendo con todos los países africanos, salvo Guinea.

¿ El mismo estudio mencionado ¿Doing Bussines 2011¿, en relación con el subindicador de eficiencia de la justicia, ubica a Colombia en el puesto 150 en un ranking de 183 países y el puesto 25 en América Latina y el Caribe entre 32 países.

En el ¿Doing Business 2012¿, Colombia avanza un puesto en eficiencia y se convierte en la 150 entre 183.

Como lo menciona la Exposición de Motivos del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional, son numerosos los potenciales efectos nocivos que pueden derivarse de la congestión judicial y la morosidad de la Administración de Justicia. En efecto, el aludido documento expresa:

¿La congestión judicial conlleva múltiples efectos negativos. Los más importantes, se pueden sintetizar, así:

¿ Impide una oportuna solución de los conflictos, generando como consecuencia, en muchas ocasiones lo que se ha denominado ¿justicia por propia mano¿.

¿ Obstaculiza la llegada de inversión extranjera al país.

¿ Agrava el ¿riesgo país¿, pues se aumenta, en general, el costo de transar con empresas o personas de nuestra jurisdicción territorial.

¿ Aumenta la inseguridad jurídica.

¿ Estimula el incumplimiento de la ley o el contrato e ¿informaliza¿ las relaciones comerciales.

¿ Afecta el crecimiento de la economía y la competitividad del país.

¿ Genera desconfianza en la ciudadanía sobre el verdadero rol del Estado y la atención de las necesidades de los asociados.

¿ Desprestigia las instituciones de justicia.

¿ Genera cultura de no pago o cumplimiento de las obligaciones¿3[3][3].

Algunas cifras relacionadas con el inventario actual de procesos permiten identificar algunos aspectos relevantes, que sirven de sustento analítico para el presente proyecto de ley. En la Tabla N° 1 que se menciona a continuación, se puede observar el inventario de procesos discriminados por jurisdicción. De dicha información puede concluirse, entre otras, que es precisamente la jurisdicción civil, que es la que por

3[3][3] Exposición de Motivos del Proyecto de ley número 019 de 2011 Cámara, por la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones.

excelencia se somete al pago del arancel judicial, la que mayor participación tiene dentro del universo de procesos judiciales activos en el país. Así, en relación con el inventario relacionado en la Tabla N° 1, para el año 2010 la especialidad jurisdiccional ordinaria civil participó con más del 70% de los procesos, para un total de 531.000 procesos activos para dicho año.

TABLA N° 1

Inventario de procesos por jurisdicciones

CONSULTAR GRÁFICO EN ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF

Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia⁴[4][4].

A continuación, la Tabla N° 2 ilustra la composición del inventario dentro de la especialidad jurisdiccional ordinaria civil. En esta se observa que el 73% de los procesos de dicha jurisdicción corresponden a procesos ejecutivos, es decir, a trámites judiciales con pretensiones económicas, siendo estos, precisamente, el grueso de los procesos a los que se aplicará el arancel judicial propuesto.

TABLA N° 2

Distribución del inventario en la jurisdicción civil

CONSULTAR GRÁFICO EN ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF

Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia.

Los siguientes datos, ilustrados en la Tabla N° 3, evidencian la distribución geográfica (cuatro principales ciudades del país) del inventario judicial de procesos ejecutivos:

TABLA N° 3

Distribución por ciudades de procesos ejecutivos

CONSULTAR GRÁFICO EN ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF

Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia.

Con todo, puede afirmarse sin temor a equívocos, que existe en la actualidad un alto grado de consenso ¿seguramente unanimidad?, en cuanto a la necesidad de adoptar medidas de fondo tendientes a garantizarles a los ciudadanos una Administración de Justicia pronta y eficaz. Una de estas medidas, importante pero no la única, es precisamente dotar de mayor recursos de inversión a la Administración de Justicia

⁴[4][4] Congestión en la Jurisdicción Ordinaria. Corporación Excelencia en la Justicia. 2010.

para el cumplimiento de sus funciones, y el arancel judicial contribuirá efectivamente a ello.

B. Constitucionalidad del arancel judicial

Debemos comenzar por mencionar que, en estricto sentido, la gratuidad de la Justicia es un principio de orden legal y no constitucional, el cual se encuentra regulado en el artículo 6° de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), modificada recientemente por la Ley 1285 de 2009.

El principio de gratuidad, en su concepción inicial, se consagró por el legislador así:

¿Artículo 6°. La Administración de Justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las expensas, agencias en derecho y costos judiciales¿.

Como puede verse, si bien es cierto la idea primigenia del principio de gratuidad de la justicia no era absoluta, también lo es que las excepciones que aparecían relacionadas constituían gastos en que directa o indirectamente incurrían o debían soportar las partes durante el curso del proceso, pero no se hacía mención al establecimiento de ninguna carga fiscal o contribución parafiscal a cargo de las partes en beneficio de la Rama Judicial, pues ello tan solo se introdujo en la reforma a esa Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, es decir, con la aprobación y visto bueno de control previo de constitucionalidad (Ley 1285 de 2009 y Sentencia C-713 de 2008 de la Corte Constitucional. M. P. Doctora Clara Inés Vargas Hernández).

Así las cosas, el arancel judicial como contribución parafiscal a cargo de quien acude en algunos tipos de procesos a la justicia, no es un tema novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, aunque sí reciente. Hace unos años, el Congreso de la República consideró oportuno establecer el arancel judicial como contribución parafiscal creando otra excepción adicional al principio de gratuidad de la justicia. En un primer momento, lo hizo a través de la reforma adelantada a la Ley 270 de 1996 *¿Ley Estatutaria de Administración de Justicia¿*, llevado a cabo a través del Proyecto de ley número 286 de 2007 Cámara, 023 de 2006 Senado, *¿por la cual se reforma la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia¿*, que dio origen a la Ley Reformatoria de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 1285 de 2009) y, posteriormente, mediante la adopción de la Ley 1394 de 2010 que regule el arancel judicial.

Así, el Proyecto de ley número 286 de 2007 Cámara, 023 de 2006 Senado, contemplaba una modificación sustancial de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en relación con el principio de gratuidad. En efecto, el artículo 2° del mencionado proyecto de ley establecía la siguiente modificación del artículo 6° de la Ley 270 de 1996:

PROYECTO DE LEY NÚMERO 286 DE 2007 CÁMARA, 023 DE 2006 SENADO
(antes del control previo de constitucionalidad)

¿Artículo 2°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 6°. Gratuidad. *La Administración de Justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley.*

En los procesos contenciosos administrativos, comerciales y civiles de cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes se cobrará a cargo del demandante un arancel judicial hasta del 2% del valor de las condenas o cuantías ejecutadas en virtud de la intervención judicial, siempre y cuando el proceso se falle dentro de los términos de ley. No se admitirá excepción alguna a este principio. Por los términos de ley debe entenderse los días de duración del proceso que no hayan excedido en el número de días previsto por la ley para fallarlo. Cuando el incumplimiento de los términos de ley para proferir sentencia ejecutoriada sea imputable a algunas partes, la que resulte responsable pagará el mismo arancel.

No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso-laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales. Tampoco podrá cobrarse aranceles a las personas de escasos recursos cuando se decrete el amparo de pobreza o en aquellos procesos o actuaciones judiciales que determinen la ley o el Consejo Superior de la Judicatura, o indiquen la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y de Justicia o la Defensoría del Pueblo, en razón de la presencia de intereses públicos, de la limitación del acceso a la justicia, o de las circunstancias especiales de las partes que ameriten una protección legal.

El arancel judicial constituirá un ingreso público consistente en el pago a favor de la rama judicial de un porcentaje del valor obtenido en el proceso como resultado de la declaración o ejecución de derechos a fin de proveer los gastos necesarios para adelantar el proceso y contribuir a la mayor eficacia, descongestión y modernización de la rama, corporaciones y despachos judiciales.

Parágrafo. *Exclúyase el cobro de aranceles en los procesos ejecutivos de viviendas de interés social.*

Como puede advertirse, en esta ocasión el Congreso de la República, a través de este Proyecto de Ley Estatutaria, incluyó de manera expresa el arancel judicial como una excepción al principio de gratuidad de la justicia. La Corte Constitucional^{5[5][5]}, en el

^{5[5][5]} Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008. M. P. Doctora Clara Inés Vargas Hernández.

proceso de revisión previa propio de las leyes estatutarias, de manera expresa avaló la constitucionalidad de la creación del arancel judicial, no obstante haber declarado la inexequibilidad por vaguedad debido a la manera como se estableció el procedimiento de recaudo del arancel. En otros términos, la Corte Constitucional avaló de fondo la creación del arancel, pero censuró la manera como el Congreso de la República diseñó el recaudo (inexequibilidad por vaguedad).

¿6. En cuanto al principio de gratuidad, esta Corporación ha considerado que si bien no tiene un expreso reconocimiento Constitucional, halla su origen ¿en los valores fundantes del Estado como son a la justicia, la convivencia, la paz, la igualdad y a un orden justo, a la vez que se deriva de la noción de justicia que apunta a la realización del principio de igualdad. Al respecto, en la Sentencia C-037 de 1996, que analizó la norma sobre el principio de gratuidad en la Administración de Justicia, la Corte sostuvo:

(¿)

Sin embargo, en la misma providencia la Corte reconoció que el principio de gratuidad no es absoluto y puede ser objeto de restricciones, por lo que declaró la constitucionalidad de la expresión ¿sin perjuicio de las expensas, agencias en derecho y costos judiciales¿. (¿)

(¿)

En decisiones posteriores la Corte ha señalado expresamente que el principio de gratuidad de la justicia no puede concebirse en términos absolutos, como por definición no lo es ningún principio o derecho constitucional. Con base en ello, ha declarado la exequibilidad de normas que imponen algunas cargas económicas con ocasión de un proceso judicial, incluso en escenarios sensibles como el derecho del trabajo, al advertir que ¿el principio de gratuidad en el proceso laboral no es absoluto.

Teniendo presente que el principio de gratuidad no irradia en forma incondicional, esta Corporación insiste en que ¿la discusión en este campo suele centrarse en las excepciones erigidas alrededor del alcance del aludido principio, toda vez que el mismo presenta limitaciones para su aplicación.

Desde esta perspectiva, el inciso primero del artículo 2º del proyecto, que hace una referencia genérica a los ¿aranceles judiciales que se fijan de conformidad con la ley¿, es una regulación que en sí misma no genera un vicio de constitucionalidad, por cuanto es plausible que el Legislador imponga ciertas restricciones al principio de gratuidad de la justicia, desde luego dentro del marco de la Constitución y de las normas que se integran a ella.

A juicio de la Corte, la existencia de aranceles judiciales no resulta per se incompatible con la Constitución, dado que corresponde a una suerte de excepción al principio general de gratuidad de la justicia que no afecta el acceso a esa función pública. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo 2º del proyecto.

Pero lo anterior no significa que toda regulación legal de los aranceles judiciales sea válida, pues bien puede ocurrir que su configuración concreta plantee deficiencias estructurales de orden constitucional, como en efecto ocurre con algunos apartes del artículo bajo revisión, según pasa a explicarse. En esa medida, lo que la Corte debe analizar ahora es si la configuración concreta del arancel judicial, prevista en los incisos y el párrafo siguientes del artículo bajo examen, se ajusta o no a los mandatos superiores en materia fiscal.

(¿)

8. Conforme a su diseño en el proyecto, los aranceles judiciales se diferencian de las agencias en derecho, costas y expensas judiciales, en la medida en que su determinación no se origina en los gastos directos de un proceso. Por eso los recursos obtenidos no se destinan a cubrir las erogaciones surgidas con ocasión del proceso, sino que se proyectan para su reinversión en la Rama Judicial, lo que, según fue explicado anteriormente, se ajusta a la Constitución desde una perspectiva global.

9. La indeterminación normativa puede dar lugar a la inconstitucionalidad de una regulación legal cuando su contenido y alcance sea materialmente incomprensible y por esa vía resulta contrario al principio de legalidad. En este sentido, como bien lo señala la doctrina autorizada, ¿una ley, por tanto, que no cumpla el requisito de precisión puede ser considerada inconstitucional.

La regla que prohíbe la indeterminación normativa ha sido utilizada en el derecho comparado para exigir especial rigor en asuntos de orden penal. Por ejemplo, en el derecho norteamericano se le conoce como la doctrina de la nulidad por vaguedad (¿)

En el caso colombiano, siguiendo la línea descrita, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado cómo en materia tributaria la indeterminación no sólo atenta contra la seguridad jurídica, sino contra el principio de legalidad (artículo 338 C. P.) y el sentido mismo de justicia (¿)¿6[6][6].

Así las cosas, la decisión de la Corte Constitucional (Sentencia C-713 de 2008) sobre disposición estatutaria que hoy se encuentra vigente (Ley 270 de 1996, modificada mediante Ley 1285 de 2009) contiene dos elementos importantes: (i) avala la constitucionalidad del arancel judicial como una contribución parafiscal (ii) avala las excepciones al cobro y pago del arancel. Así las cosas, la disposición hoy vigente a nivel estatutario reza:

¿Artículo 6°. Gratuidad. *La Administración de Justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley.*

No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales. Tampoco podrá

6[6][6] Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008. M. P. Doctora Clara Inés Vargas Hernández.

cobrar aranceles a las personas de escasos recursos cuando se decreta el amparo de pobreza o en aquellos procesos o actuaciones judiciales que determinen la ley.

El arancel judicial constituirá un ingreso público a favor de la rama judicial¿.

Como consecuencia de la declaratoria de inexecutable por vaguedad del artículo 2° del Proyecto de Ley Estatutaria antes mencionado, y atendiendo la importancia de la materia, el Congreso de la República aprobó la Ley 1394 de 2010, por medio de la cual se creó el arancel judicial, como contribución parafiscal, para todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smlmv). Los recursos obtenidos por el arancel judicial serían destinados a contribuir en los gastos de funcionamiento e inversión de la Rama Judicial, descongestión de los despachos judiciales y la implementación de la oralidad en los procedimientos judiciales, al igual que se designó como administrador de los mismos al Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia.

Recientemente, la Corte Constitucional se pronunció en relación con la constitucionalidad del establecimiento del arancel judicial, llevando a cabo el examen de executable nuevamente desde la perspectiva del principio de gratuidad de la justicia y del derecho constitucional de acceso a la Administración de Justicia. En esta oportunidad^{7[7][7]}, el máximo Tribunal Constitucional reiteró su jurisprudencia previa en el sentido de considerar que la creación del arancel judicial, en modo alguno, infringe *per se* la Carta Política, pero además, a diferencia del fallido Proyecto de Ley Estatutaria, encontró executable la forma en que fue concebido por el legislador el arancel y que por ende se ajustaba igualmente a la Constitución. Señaló en esta oportunidad la Corte Constitucional:

¿De este modo, no cabe duda, que el nuevo arancel reglamentado en la Ley 1394 de 2010, corresponde a una contribución parafiscal, como acertadamente lo precisó el legislador en el artículo 1° y que contrario a lo que sostienen los demandantes, no resulta por sí mismo contrario a los principios de gratuidad y de acceso a la Administración de Justicia, en la medida que se inscribe dentro del margen de excepciones a la aplicación de la gratuidad en la justicia, que no es un principio absoluto. Sobre esta base, el legislador, dentro de un amplio margen de configuración (artículos 150, numerales 11 y 12 y 338 C. P.), se encuentra facultado para imponer válidamente restricciones al principio de gratuidad de la justicia, en este caso, por vía de implementación del arancel judicial, siempre que en su reglamentación no se violen los principios constitucionales¿.

En esa línea, la Corte consideró que las características particulares atribuidas por el legislador al arancel judicial, llevan a descartar una violación de dichos principios, como quiera que el aludido gravamen persigue un fin constitucionalmente legítimo,

^{7[7][7]} Corte Constitucional. Sentencia C-368 de 2011. M. P. Doctor Gabriel Mendoza Martelo.

como es el de contribuir a mejorar el funcionamiento del aparato judicial (artículo 1º C. P.), el cual viene padeciendo problemas crónicos que han aumentado significativamente el atraso y la congestión en el sistema de justicia y para cuya solución es necesaria la consecución de recursos que desbordan la capacidad de asignar a la Rama Judicial, dada la escasez de ingresos públicos y la necesidad de invertir en otras áreas igualmente importantes. A la vez, presenta un margen de aplicación bastante reducido y sólo afecta a quien cuenta con recursos suficientes para acceder a la Administración de Justicia y no se cobra a quienes no cuentan con capacidad económica, porque se excluye a las personas de los niveles 1 y 2 del Sisbén y a quien solicite amparo de pobreza¿8[8][8].

Valga decir que, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-643 de 2011^{9[9][9]} declaró la exequibilidad de la Ley 1394 de 2010 frente al cargo de requerir ley estatutaria todo lo relacionado con el arancel judicial. Es decir, en esta sentencia dejó en claro la Corte Constitucional, el hecho de que para diseñarlo basta una ley ordinaria.

En este orden de ideas, no cabe duda alguna acerca de la constitucionalidad de la norma que se somete a su consideración, toda vez que, como se pasa a explicar, lo que aquí se pretende es hacer un nuevo diseño, en *pro* de la efectividad del recaudo del arancel judicial hoy existente y declarado exequible por la Corte Constitucional.

C. Necesidad de reformar la actual normatividad

Los suscritos Ponentes coinciden con la posición del Gobierno Nacional manifestada en la Exposición de Motivos del proyecto de ley, en cuanto a la necesidad de reformar el régimen actual del arancel judicial. En efecto, a pesar de las buenas intenciones con las que el Congreso de la República aprobó la Ley 1394 de 2010, la realidad ha demostrado que la forma como se concibió el hecho generador del arancel judicial, supeditado al efectivo recaudo de las condenas económicas por parte del demandante, ha conllevado grandes dificultades y frustraciones en el efectivo recaudo del arancel.

Así las cosas, el proyecto de ley plantea una reforma estructural consistente en rediseñar el hecho generador del arancel judicial, de forma tal que el demandante proceda a su pago al inicio del proceso, sujeto a un futuro reconocimiento por parte del juez al momento de liquidar las costas del proceso, en caso de resultar vencedor dentro del mismo.

De este modo, se superan los inconvenientes que se han advertido en la vigencia de la Ley 1394 de 2010, principalmente, los señalados en la Exposición de Motivos:

¿Tal disposición normativa presenta varios inconvenientes a saber:

8[8][8] Corte Constitucional. Sentencia C-368 del 11 de mayo de 2011. M. P. Doctor Gabriel Mendoza Martelo.

9[9][9] Corte Constitucional. Sentencia C-643 del 31 de agosto de 2011. M. P. Doctora María Victoria Calle Correa.

¿ No hay relación entre el recaudo por parte del demandante victorioso y el desgaste del aparato judicial. El aparato judicial se desgasta igual, con recaudo o sin recaudo del demandante.

¿ Quien temerariamente demanda ante la justicia no paga arancel, pues como no prosperan sus pretensiones, no tiene sumas por recaudar. Por esta razón, a pesar de que existe un desgaste efectivo de la Administración de Justicia, no hay lugar a recaudo y mucho menos al cobro del arancel.

¿ Implica que quien está asistido de la razón y por ello obtiene la prosperidad de sus pretensiones y recaudo de lo cobrado, sea quien tenga que pagar el arancel, lo cual no es lógico porque el arancel judicial debe tenerse como una costa procesal más, a cargo de quien estuvo desprovisto de la razón y perdió el litigio.

¿ Facilita que las partes del proceso eludan el pago de la contribución parafiscal, pues estas, en ocasiones, con el fin de no sufragar el valor total del arancel, disfrazan la terminación de los procesos por pago, por la vía del desistimiento, desistimiento tácito, perención o simplemente abandono, acudiendo al cumplimiento extrajudicial (pago) de las obligaciones objeto del proceso judicial, lo cual es prácticamente imposible de supervisar y controlar.

¿ Genera una carga operativa adicional para la Administración de Justicia, pues en caso de que el demandante no pague o pague parcialmente la contribución, aquella, en aras de obtener el arancel judicial, deberá perseguir al evasor en un nuevo y engorroso proceso¿10[10][10].

Resulta apropiado resaltar también, que se corrige la inequidad que opera en la actual Ley 1394 de 2010, consistente en que el demandante victorioso, a quien la Administración de Justicia le ha dado la razón sobre sus reclamaciones, es quien debe asumir la carga impositiva del arancel judicial. Acudiendo a un principio de equidad, el proyecto de ley contempla que el arancel judicial sea tenido como un ingrediente más de las costas procesales que deberá asumir la parte que resulte vencida en el juicio.

E. Consecuencias y beneficios del arancel judicial y la reforma

De acuerdo con las estimaciones que se realizaron durante el trámite legislativo de la Ley 1394 de 2010, al establecer un arancel judicial con una tarifa del 2% para los procesos civiles cuya cuantía superara los \$100 millones de pesos, se esperaba recaudar alrededor de **doscientos mil millones de pesos** (\$200.000.000.000), partiendo del supuesto que el recaudo se realizaría al momento del cobro efectivo de las condenas dinerarias de la sentencia, en los procesos en donde este se causara.

De acuerdo con las Tablas 4 y 5 que se muestran a continuación, de verificarse en la realidad el cumplimiento de dicha meta, el recaudo representaría por esta vía en un

10[10][10] Exposición de Motivos del Proyecto de ley número 019 de 2011 Cámara, por la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones.

incremento de cerca del 10% del presupuesto total del Sector Jurisdiccional^{11[11][11]} y el 100% si se analizará únicamente lo relacionado con presupuesto de inversión. Se reitera, más representativo aún resulta el impacto que tendría un recaudo de esta naturaleza en el presupuesto de inversión del Sector Jurisdiccional, toda vez que representaría un incremento de cerca del 100%, en comparación con el presupuesto establecido para este mismo rubro en el 2011 o 2012. Veamos:

TABLA N° 4

Presupuesto de la Rama Judicial^{12[12][12]} y del Sector Jurisdiccional 2000-2011

CONSULTAR GRÁFICO EN ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF

TABLA N° 5

Presupuesto de inversión de la Rama Judicial y del Sector Jurisdiccional 2000-2011

CONSULTAR GRÁFICO EN ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF

No obstante las evidentes ventajas que se derivarían de un efectivo ingreso del arancel judicial a las arcas del presupuesto de la Rama Judicial, las cifras proporcionadas por el Consejo Superior de la Judicatura dan cuenta de un exiguu recaudo aproximado de **nueve mil millones de pesos (\$9.000.000.000)** para el año 2011, cifra ostensiblemente lejana a lo inicialmente esperado (es decir, menos del 5% por ciento de lo esperado). Así las cosas, el Proyecto de Ley presenta evidentes ventajas desde el punto de vista económico que redundarían en beneficio de una Administración de Justicia fortalecida en su presupuesto de inversión.

Finalmente, el proyecto de ley presenta significativas ventajas, todas ellas mencionadas en la Exposición de Motivos presentada por el Gobierno Nacional, en el sentido de corregir las siguientes deficiencias del actual régimen:

¿ Teniendo en cuenta que el desgaste del aparato jurisdiccional es independiente del efectivo recaudo de las condenas económicas por parte del demandante, en el proyecto se modifica este aspecto como parte del hecho generador de la contribución, en la medida que se paga al momento de demandar.

¿ El arancel judicial debe tenerse como una costa procesal más, a cargo de quien estuvo desprovisto de la razón y perdió. Por eso el nuevo esquema impone el pago al demandante, pero en caso de ganar el proceso, le permite trasladarlo a costas.

^{11[11][11]} El Sector Jurisdiccional está conformado por las Altas Cortes, los Tribunales y Juzgados del país.

^{12[12][12]} La Rama Judicial es el Sector Jurisdiccional más la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

¿ El arancel judicial al inicio del proceso funcionaría como una especie de control frente a demandas temerarias. Bajo el actual esquema, quien interponga una demanda temeraria no debe pagar el arancel, habida cuenta que no existe un recaudo efectivo de condenas, por la sencilla razón que sus pretensiones no prosperan.

¿ Se controla la elusión y evasión del arancel por las partes, cerrando el paso al uso de mecanismos aparentemente legales ¿como la transacción, el desistimiento o el desistimiento tácito¿ para el pago de la contribución parafiscal.

¿ Libera a la Administración de Justicia de la carga operativa adicional de supervisar y controlar el pago del arancel posterior a la emisión de la sentencia, pues el pago se hace al momento de presentarse la demanda.

¿ Esta medida está a tono con la actual coyuntura de Reforma Constitucional a la Justicia, reforma que en sí misma, justifica el presente Proyecto de Ley, pues existe en dicho proyecto, por ahora, aprobada la suma de 2 billones de pesos para inversión en el Sector Jurisdiccional y además, constitucionaliza el propio arancel judicial.

Modificaciones para segundo debate Senado

Teniendo en cuenta que se hace necesario realizar ciertos ajustes en algunos artículos del proyecto de ley, nos permitimos presentar los cambios que sufre el articulado con el presente Informe de Ponencia y que constituirán el respectivo Pliego de Modificaciones.

Artículo 2º. Se hace una simple claridad en que los recursos recaudados mediante la contribución parafiscal, son recursos ¿adicionales¿ al Presupuesto que ordinaria y anualmente debe girar el Gobierno Nacional para inversión del Sector Jurisdiccional.

Artículo 3º. Se hace una simple claridad en que los ingresos que se recauden por concepto de arancel judicial, estarán destinados al ¿Sector Jurisdiccional¿ (Alta Cortes, Tribunales y Juzgados) y no a la totalidad de la Rama Judicial (Fiscalía General de la Nación e Instituto de Medicina Legal).

Artículo 4º. Se hace una claridad en la redacción para expresar que las excepciones al cobro del arancel judicial son las mismas de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y otras adicionales que aquí se introducen.

Artículo 5º. En el primer inciso del artículo se hace precisión en relación con las acciones constitucionales, al enlistarlas claramente, para que sean exentas del cobro de arancel judicial y después no haya claridad sobre si determinada acción es de las denominadas ¿constitucionales¿. Además, se excluyen de arancel judicial los procesos liquidatorios, de insolvencia y de jurisdicción voluntaria.

De la misma manera se aclara que la obligación de pagar arancel judicial que tendrían los colectores de activos, solo aplica cuando se trata del cobro de obligaciones respecto de las cuales son causahabientes del sector financiero. En los demás casos, están exonerados del pago de arancel.

En el segundo inciso, se especifica el procedimiento en que se debe hacer la devolución total o parcial del arancel judicial para procesos contencioso administrativos

distintos del laboral, en donde prosperen las pretensiones del demandante, que es el mismo que se establece en artículo posterior para la devolución del arancel cuando la justicia decide por fuera de los términos máximos de duración de los procesos.

Se incluye un inciso, para indicar que cuando se demande ante una autoridad administrativa en ejercicio de función jurisdiccional en aquellos asuntos en los que esta y el juez tengan competencia a prevención para conocer de la actuación, el arancel judicial se causará a favor de la autoridad administrativa respectiva, en razón de que dicha autoridad se comporta como juez, presta servicios de justicia y también requiere de recursos adicionales para una mejor prestación del servicio. Excluir el cobro del arancel judicial en estos casos, generaría un incentivo perverso que pondría en mejor nivel de atracción a las autoridades administrativas que a los jueces.

A lo largo del artículo se hacen algunas correcciones de tipo gramatical.

Artículo 6º. En el primer inciso se adicionan nuevos sujetos pasivos (quien presenta una demanda acumulada y el que inicie un incidente de liquidación de perjuicios cuando no se trate del mismo demandante que pagó el arancel al presentar la demanda.

En el inciso final se hace una precisión para que el valor del arancel judicial sea indexado al momento de liquidar las costas, con lo cual se restituye el valor actualizado del arancel judicial.

Se adiciona un párrafo 1º aclaratorio para evitar discusiones y proscribir que en litisconsorcios facultativos uno solo pague y todos los demás queden exentos, cuando de haber demandado por separado lo tendrían que haber pagado. Es preciso destacar que estos deben ser considerados como litigantes separados, con relaciones jurídicas independientes, aunque conexas, como es apenas obvio. En caso de litisconsorcio necesario o cuasinecesarios, el pago puede ser efectuado por uno de los litisconsortes.

Finalmente se incluye un párrafo segundo, pues puede suceder, que el juez se percate que no se ha pagado el arancel judicial en una etapa posterior a la de la admisión de la demanda o, en general, a aquella en la que debía pagarse. En tal caso, se faculta al juez para que haga el respectivo cobro con un plazo de cinco (5) días, so pena de que el demandante se atenga a las consecuencias del desistimiento tácito, perención u otra forma de terminación anormal del proceso, según fuere el estatuto procesal aplicable.

Artículo 8º. Se aclara que la devolución del pago de arancel judicial, cuando el juez no haya cumplido los términos procesales, se hará de acuerdo con lo que estipule la normatividad procesal pertinente.

Artículo 9º. En relación con el procedimiento de recaudo del arancel judicial que se estipula en el párrafo de este artículo, se precisa que lo hará el Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces.

Artículo 11. Se prioriza la destinación de los recursos recaudados por concepto de arancel judicial para la implementación de los estatutos procesales que establecen la oralidad en la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa, siempre que los procedimientos que hacen parte de estas, causen arancel judicial.

Artículo 14. Se hace manifiesta la *ultractividad* de la Ley 1394 de 2010 para los procesos que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley. Con lo establecido en el artículo 12 y 13 del proyecto, queda claro que los procesos iniciados bajo el imperio de la Ley 1394 de 2010 deberán regularse en cuanto a la obligación de pagar arancel o no, el momento en que deben efectuar el pago, la tarifa y demás asuntos, y que este proyecto en caso de convertirse en ley, solo cobijaría a los procesos instaurados con posterioridad a su entrada en vigencia.

El siguiente cuadro presenta, de manera integrada, las modificaciones al texto del Proyecto de Acto Legislativo:

Texto Aprobado en Primer Debate Comisión Tercera del Senado de la República	Ponencia Segundo Debate Plenaria del Senado República
Artículo 1°. <i>Gratuidad de la justicia.</i> La Administración de Justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley.	Artículo 1°. <i>Gratuidad de la justicia.</i> La Administración de Justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley.
Artículo 2°. <i>Naturaleza jurídica.</i> El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de inversión de la Administración de Justicia. Los recursos recaudados con ocasión del arancel judicial serán administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia. Parágrafo. La partida presupuestal que anualmente asigna el Gobierno Nacional al sector jurisdiccional no podrá ser objeto, en ningún caso, de recorte, so pretexto de la existencia de los recursos recaudados por concepto de arancel.	Artículo 2°. <i>Naturaleza jurídica.</i> El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de inversión de la Administración de Justicia. Los recursos recaudados con ocasión del arancel judicial serán administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia. Parágrafo. La partida presupuestal <u>de inversión</u> que anualmente asigna el Gobierno Nacional al sector jurisdiccional no podrá ser objeto, en ningún caso, de recorte, so pretexto de la existencia de los recursos <u>adicionales</u> recaudados por concepto de arancel.
Artículo 3°. <i>Sujeto activo.</i> El arancel judicial se causa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.	Artículo 3°. <i>Sujeto activo.</i> El arancel judicial se causa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.

Texto Aprobado en Primer Debate Comisión Tercera del Senado de la República	Ponencia Segundo Debate Plenaria del Senado República
<p>El arancel judicial constituirá un ingreso público a favor de la Rama Judicial.</p>	<p>El arancel judicial constituirá un ingreso público a favor <u>del Sector Jurisdiccional</u> de la Rama Judicial.</p>
<p>Artículo 4°. Hecho generador. El arancel judicial se genera en todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, con las excepciones <u>de</u> la presente ley.</p>	<p>Artículo 4°. Hecho generador. El arancel judicial se genera en todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, con las excepciones <u>previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en</u> la presente ley.</p>
<p>Artículo 5°. Excepciones. No podrá cobrarse arancel en los <u>procedimientos</u> arbitrales, de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de <u>la acción</u> de tutela y demás acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público, salvo las <u>entidades públicas</u> que pertenezcan al sector financiero o que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin importar su naturaleza jurídica y los colectores de activos públicos señalados como tales en la ley.</p> <p>En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandante sea un particular, se causará y pagará el arancel judicial de acuerdo con las reglas generales previstas en la presente ley. Sin embargo, en caso de que prosperen total o parcialmente las pretensiones, el juez ordenará en la sentencia que ponga fin al proceso la devolución, total o parcial, del arancel judicial.</p> <p>En los casos en que el demandante sea una persona natural de los niveles de <u>Sisbén</u> 1, 2 y 3 o con amparo de pobreza, el pago del</p>	<p>Artículo 5°. Excepciones. No podrá cobrarse arancel en los <u>procesos</u> arbitrales, de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, <u>procesos liquidatorios, de insolvencia, de jurisdicción voluntaria</u>, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de <u>acciones</u> de tutela, <u>populares, de grupo, de cumplimiento</u> y demás acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público, salvo las que pertenezcan al sector financiero o que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin importar su naturaleza jurídica y los colectores de activos públicos señalados como tales en la ley <u>cuando sean causahabientes de obligaciones dinerarias de alguna entidad del sector financiero.</u></p> <p>En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandante sea un particular, se causará y pagará el arancel judicial de acuerdo con las reglas generales previstas en la presente ley. Sin embargo, en caso de que prosperen total o parcialmente las pretensiones, el juez ordenará en la sentencia que ponga fin al proceso la devolución, total o parcial, del arancel judicial <u>y dará aplicación al parágrafo 1° del artículo 8° de esta ley.</u></p> <p>En los casos en que el demandante sea una persona natural de los niveles de <u>Sisbén</u> ,1 <u>2o</u> 3 o con amparo de pobreza, el pago del</p>

Texto Aprobado en Primer Debate Comisión Tercera del Senado de la República	Ponencia Segundo Debate Plenaria del Senado República
<p>arancel judicial estará a cargo del demandado vencido en el proceso. En este caso, la base gravable serán las condenas económicas decretadas en la sentencia. El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar. Las personas pertenecientes a los niveles de <u>Sisbén 2 ,1 y 3</u> acreditarán su condición con el respectivo carné.</p> <p>En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandado sea un particular, se aplicará la misma regla prevista en el inciso anterior para las personas de los niveles de <u>Sisbén 2 ,1 y 3</u> con amparo de pobreza.</p> <p>Parágrafo 1°. Quien utilice información o documentación falsa o adulterada, o que a través de cualquier otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas en el presente artículo, deberá cancelar, a título de sanción, un arancel judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sanciones penales que hubiere lugar.</p> <p>Parágrafo 2°. En las sucesiones procesales en las que el causante hubiere estado exceptuado del pago del arancel judicial, será obligatorio su pago, salvo que el causahabiente, por la misma u otra condición, se encuentre eximido. El juez no podrá admitir al sucesor procesal sin que este hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubiere lugar.</p>	<p>arancel judicial estará a cargo del demandado vencido en el proceso. En este caso, la base gravable serán las condenas económicas decretadas en la sentencia. El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar. Las personas pertenecientes a los niveles de <u>Sisbén 2 ,1 o 3</u> acreditarán su condición con el respectivo carné.</p> <p>En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandado sea un particular, se aplicará la misma regla prevista en el inciso anterior para las personas de los niveles de <u>Sisbén 2 ,1 o 3</u> con amparo de pobreza.</p> <p><u>Cuando se demande ante una autoridad administrativa en ejercicio de función jurisdiccional en aquellos asuntos en los que esta y el juez tengan competencia a prevención para conocer de la actuación, el arancel judicial se causará a favor de la autoridad administrativa respectiva.</u></p> <p>Parágrafo 1°. Quien utilice información o documentación falsa o adulterada, o que a través de cualquier otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas en el presente artículo, deberá cancelar, a título de sanción, un arancel judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sanciones penales que hubiere lugar.</p> <p>Parágrafo 2°. En las sucesiones procesales en las que el causante hubiere estado exceptuado del pago del arancel judicial, será obligatorio su pago, salvo que el causahabiente, por la misma u otra condición, se encuentre eximido. El juez no podrá admitir al sucesor procesal sin que este hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubiere lugar.</p>
<p>Artículo 6°. Sujeto pasivo. El arancel judicial está a cargo del demandante inicial <u>o</u> del demandante en reconvención en procesos con pretensiones dinerarias. De la</p>	<p>Artículo 6°. Sujeto pasivo. El arancel judicial está a cargo del demandante inicial, del demandante en reconvención, <u>o</u> de quien presenta una demanda acumulada</p>

<p>Texto Aprobado en Primer Debate Comisión Tercera del Senado de la República</p>	<p>Ponencia Segundo Debate Plenaria del Senado República</p>
<p>misma manera, estará a cargo del llamante en garantía, del denunciante del pleito, del <i>ad excludendum</i>, y de todo aquel que ejerza una pretensión dineraria.</p> <p>El accionante al momento de presentar su demanda deberá cancelar el arancel judicial y deberá anexar a su demanda el correspondiente comprobante de pago. En caso de no pagar, no acreditar su pago o hacer un pago parcial del arancel judicial, su demanda será inadmitida en los términos del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.</p> <p>El juez estará obligado a controlar que el arancel judicial se haya pagado de acuerdo con lo establecido en la ley o que la persona o el proceso se encuentren exonerados de pagar el arancel judicial, de lo cual dejará constancia en el auto admisorio de la demanda.</p> <p>El arancel se tendrá en cuenta al momento de liquidar las costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes. Al momento de liquidar las costas solo se tendrá en cuenta el valor del arancel judicial, excluyendo del mismo las sanciones previstas en el parágrafo 1° del artículo 5° de la presente ley.</p>	<p>en procesos con pretensiones dinerarias. De la misma manera, estará a cargo del llamante en garantía, del denunciante del pleito, del <i>ad excludendum</i>, <u>del que inicie un incidente de liquidación de perjuicios cuando no se trate del mismo demandante que pagó el arancel al presentar la demanda</u> y de todo aquel que ejerza una pretensión dineraria.</p> <p>El accionante al momento de presentar su demanda deberá cancelar el arancel judicial y deberá anexar a su demanda el correspondiente comprobante de pago. En caso de no pagar, no acreditar su pago o hacer un pago parcial del arancel judicial, su demanda será inadmitida en los términos del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.</p> <p>El juez estará obligado a controlar que el arancel judicial se haya pagado de acuerdo con lo establecido en la ley o que la persona o el proceso se encuentren exonerados de pagar el arancel judicial, de lo cual dejará constancia en el auto admisorio de la demanda.</p> <p>El arancel se tendrá en cuenta al momento de liquidar las costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes. Al momento de liquidar las costas solo se tendrá en cuenta el valor <u>indexado</u> del arancel judicial, excluyendo del mismo las sanciones previstas en el parágrafo 1° del artículo 5° de la presente ley.</p> <p><u>Parágrafo 1°. En caso de litisconsorcio necesario, el pago del arancel podrá ser realizado por uno cualquiera de los litisconsortes. La misma regla se aplicará a los litisconsortes cuasinecesarios. Si el litisconsorcio es facultativo, cada uno de los litisconsortes deberá pagar el arancel judicial. En los eventos de coadyuvancia o llamamiento de oficio, no se causará el arancel.</u></p> <p>Parágrafo 2°. Si en cualquier etapa del proceso se establece que n o se ha pagado</p>

Texto Aprobado en Primer Debate Comisión Tercera del Senado de la República	Ponencia Segundo Debate Plenaria del Senado República
	<p>total o parcialmente el arancel judicial, el juez realizará el requerimiento respectivo para que se cancele en el término de cinco (5) días, so pena de aplicar las consecuencias previstas para el desistimiento tácito, la perención o cualquier otra forma de terminación anormal del proceso, según el estatuto procesal aplicable.</p>
<p>Artículo 7°. Base gravable. El arancel judicial se calculará sobre las pretensiones dinerarias de la demanda o de cualquier otro trámite que incorpore pretensiones dinerarias.</p> <p>Cuando en la demanda se incorporen varias pretensiones dinerarias, todas ellas deberán sumarse con el fin de calcular el valor del arancel judicial. Las pretensiones dinerarias que incorporen frutos, intereses, multas, perjuicios, sanciones, mejoras o similares se calcularán a la fecha de presentación de la demanda.</p> <p>Las pretensiones dinerarias expresadas en salarios mínimos legales mensuales, en moneda extranjera o cualquier otra unidad de valor, deberán liquidarse, para efectos del pago del arancel judicial, a la fecha de presentación de la demanda.</p>	<p>Artículo 7°. Base gravable. El arancel judicial se calculará sobre las pretensiones dinerarias de la demanda o de cualquier otro trámite que incorpore pretensiones dinerarias.</p> <p>Cuando en la demanda se incorporen varias pretensiones dinerarias, todas ellas deberán sumarse con el fin de calcular el valor del arancel judicial. Las pretensiones dinerarias que incorporen frutos, intereses, multas, perjuicios, sanciones, mejoras o similares se calcularán a la fecha de presentación de la demanda.</p> <p>Las pretensiones dinerarias expresadas en salarios mínimos legales mensuales, en moneda extranjera o cualquier otra unidad de valor, deberán liquidarse, para efectos del pago del arancel judicial, a la fecha de presentación de la demanda.</p>
<p>Artículo 8°. Tarifa. La tarifa del arancel judicial es del uno punto cinco por ciento (1.5%) de la base gravable.</p> <p>Parágrafo 1°. Las sumas pagadas por concepto de arancel judicial serán objeto de devolución al demandante, en el evento en que el juez de única, primera o segunda instancia no cumpla con los términos procesales fijados en la ley en relación con la duración máxima de los procesos.</p> <p>El trámite de devolución del arancel judicial podrá realizarse, a solicitud del sujeto o pasivo que realizó el pago, mediante el reembolso directo o mediante la entrega de certificados de devolución de</p>	<p>Artículo 8°. Tarifa. La tarifa del arancel judicial es del uno punto cinco por ciento (1.5%) de la base gravable.</p> <p>Parágrafo 1°. Las sumas pagadas por concepto de arancel judicial serán objeto de devolución al demandante, en el evento en que el juez de única, primera o segunda instancia no cumpla con los términos procesales fijados en la ley en relación con la duración máxima de los procesos, <u>de conformidad con lo establecido en las normas procesales.</u></p> <p>El trámite de devolución del arancel judicial podrá realizarse, a solicitud del sujeto pasivo que realizó el pago, mediante el reembolso directo o mediante la entrega</p>

Texto Aprobado en Primer Debate Comisión Tercera del Senado de la República	Ponencia Segundo Debate Plenaria del Senado República
<p>arancel judicial que serán títulos valores a la orden, transferibles, destinados a pagar los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los términos que establezca el Gobierno Nacional.</p> <p>La emisión y entrega de los certificados de devolución de arancel judicial la efectuará la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, de acuerdo con el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.</p> <p>El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), adoptará los procedimientos que considere necesarios a fin de autorizar y controlar el pago de los Impuestos Nacionales con los Certificados de Devolución de Arancel Judicial.</p> <p>Parágrafo 2º. Cuando la demanda no fuere tramitada por rechazo de la misma en los términos establecidos en la ley procesal, el juez en el auto correspondiente ordenará desglosar el comprobante de pago, con el fin de que el demandante pueda hacerlo valer al momento de presentar nuevamente la demanda.</p>	<p>de certificados de devolución de arancel judicial que serán títulos valores a la orden, transferibles, destinados a pagar los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los términos que establezca el Gobierno Nacional.</p> <p>La emisión y entrega de los certificados de devolución de arancel judicial la efectuará la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, de acuerdo con el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.</p> <p>El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), adoptará los procedimientos que considere necesarios a fin de autorizar y controlar el pago de los Impuestos Nacionales con los Certificados de Devolución de Arancel Judicial.</p> <p>Parágrafo 2º. Cuando la demanda no fuere tramitada por rechazo de la misma en los términos establecidos en la ley procesal, el juez en el auto correspondiente ordenará desglosar el comprobante de pago, con el fin de que el demandante pueda hacerlo valer al momento de presentar nuevamente la demanda.</p>
<p>Artículo 9. Pago. Toda suma a pagar por concepto de arancel judicial, deberá hacerse a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura, ¿o la entidad que haga sus veces,¿ Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, según lo reglamente el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Una vez ejecutoriada la providencia que imponga pago del arancel judicial, se remitirá copia de la misma al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.</p> <p>Toda providencia ejecutoriada que imponga el pago del arancel judicial presta mérito ejecutivo.</p>	<p>Artículo 9. Pago. Toda suma a pagar por concepto de arancel judicial, deberá hacerse a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura, ¿o la entidad que haga sus veces,¿ Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, según lo reglamente el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Una vez ejecutoriada la providencia que imponga pago del arancel judicial, se remitirá copia de la misma al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.</p> <p>Toda providencia ejecutoriada que imponga el pago del arancel judicial presta mérito ejecutivo.</p>

Texto Aprobado en Primer Debate Comisión Tercera del Senado de la República	Ponencia Segundo Debate Plenaria del Senado República
<p>Las sumas adeudadas por concepto del arancel judicial a que se refiere esta ley, serán considerados créditos de primera clase, en los términos del artículo 2495 del Código Civil.</p> <p>Parágrafo: Para efectos del pago y recaudo de que trata el inciso 1° de este artículo, el Consejo Superior de la Judicatura podrá recaudar total o parcialmente el arancel judicial a través de los bancos y demás entidades financieras para lo cual señalará los requisitos exigidos para la autorización y establecerá los convenios que estime pertinente, aplicado en lo que corresponda el artículo 801 del Estado Tributario.</p>	<p>Las sumas adeudadas por concepto del arancel judicial a que se refiere esta ley, serán considerados créditos de primera clase, en los términos del artículo 2495 del Código Civil.</p> <p>Parágrafo. Para efectos del pago y recaudo de que trata el inciso 1° de este artículo, el Consejo Superior de la Judicatura <u>o quien haga sus veces</u> podrá recaudar total o parcialmente el arancel judicial a través de los bancos y demás entidades financieras para lo cual señalará los requisitos exigidos para la autorización y establecerá los convenios que estime pertinente, aplicado en lo que corresponda el artículo 801 del Estatuto Tributario.</p>
<p>Artículo 10. Falta disciplinaria. Todos los procesos deberán recibir un mismo trato en cuanto a su trámite e impulso. Constituye falta disciplinaria gravísima del juez, retrasar, sin justificación, la tramitación de los procesos en los que no se causa arancel.</p>	<p>Artículo 10. Falta disciplinaria. Todos los procesos deberán recibir un mismo trato en cuanto a su trámite e impulso. Constituye falta disciplinaria gravísima del juez, retrasar, sin justificación, la tramitación de los procesos en los que no se causa arancel.</p>
<p>¿Artículo 11. Destinación, vigencia y recaudo. Destínense los recursos recaudados por concepto de arancel judicial de que trata la presente ley para la descongestión de los despachos judiciales y la implementación del sistema oral a nivel nacional. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, tendrá la facultad de administrar, gestionar y recaudar el mismo, sin perjuicio de que el recaudo se realice a través del sistema financiero.</p> <p>Parágrafo. De los recursos del arancel judicial se destinará hasta el diez por ciento</p>	<p>Artículo 11. Destinación, vigencia y recaudo. Destínense los recursos recaudados por concepto de arancel judicial de que trata la presente ley para la descongestión de los despachos judiciales y la implementación del sistema oral a nivel nacional. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, tendrá la facultad de administrar, gestionar y recaudar el mismo, sin perjuicio de que el recaudo se realice a través del sistema financiero.</p> <p><u>Los recursos deberán priorizarse para atender los planes de implementación de las disposiciones previstas en los estatutos procesales que establecen la tramitación de procesos en forma oral y por audiencias en la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa en donde se causan los recursos del arancel judicial.</u></p> <p>Parágrafo. De los recursos del arancel judicial se destinará hasta el diez por ciento</p>

Texto Aprobado en Primer Debate Comisión Tercera del Senado de la República	Ponencia Segundo Debate Plenaria del Senado República
(10%) para la jurisdicción especial indígena. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, en enero de cada año, informará a la Mesa permanente de concertación indígena el valor total recaudado por concepto de arancel judicial.¿	(10%) para la jurisdicción especial indígena. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, en enero de cada año, informará a la Mesa permanente de concertación indígena el valor total recaudado por concepto de arancel judicial.
Artículo 12. Seguimiento. Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, deberá rendir un informe al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, acerca de las sumas recaudadas por concepto de arancel judicial, su destino y el empleo en programas de descongestión de la Administración de Justicia, e implementación de la oralidad en los procedimientos judiciales.	Artículo 12. Seguimiento. Dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, el Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, deberá rendir un informe al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, acerca de las sumas recaudadas por concepto de arancel judicial, su destino y el empleo en programas de descongestión de la Administración de Justicia, e implementación de la oralidad en los procedimientos judiciales.
Artículo 13. Régimen de transición. El Arancel Judicial de que trata la presente ley se generará a partir de su vigencia y sólo se aplicará a los procesos cuyas demandas se presenten con posterioridad a la vigencia de esta ley. Las demandas presentadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se registrarán por las disposiciones previstas en la Ley 1394 de 2010 y estarán obligadas al pago del arancel judicial en los términos allí previstos.	Artículo 13. Régimen de transición. El Arancel Judicial de que trata la presente ley se generará a partir de su vigencia y sólo se aplicará a los procesos cuyas demandas se presenten con posterioridad a la vigencia de esta ley. Las demandas presentadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se registrarán por las disposiciones previstas en la Ley 1394 de 2010 y estarán obligadas al pago del arancel judicial en los términos allí previstos.
Artículo 14. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga la Ley 1394 de 2010, así como todas las disposiciones que le sean contrarias¿.	Artículo 14. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga la Ley 1394 de 2010, <u>salvo para los efectos previstos en el artículo anterior,</u> así como todas las disposiciones que le sean contrarias.

Proposición

Por las anteriores consideraciones, nos permitimos solicitar a los honorables Senadores, darle segundo debate al Proyecto de ley número 224 de 2012 Senado, 019 de 2011 Cámara, *por la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones, así como* aprobar las modificaciones propuestas en el pliego de modificaciones que se adjunta a este informe de ponencia.

Honorables Senadores,

Gabriel Zapata Correa,
Honorable Senador de la República,
Ponente.

**PLIEGO DE MODIFICACIONES SEGUNDO DEBATE PLENARIA SENADO
DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2012
SENADO, 019 DE 2011 CÁMARA**

por la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. *Gratuidad de la justicia.* La Administración de Justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley.

Artículo 2°. *Naturaleza jurídica.* El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de inversión de la Administración de Justicia.

Los recursos recaudados con ocasión del arancel judicial serán administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia.

Parágrafo. La partida presupuestal de inversión que anualmente asigna el Gobierno Nacional al sector jurisdiccional no podrá ser objeto, en ningún caso, de recorte, so pretexto de la existencia de los recursos adicionales recaudados por concepto de arancel.

Artículo 3°. *Sujeto activo.* El arancel judicial se causa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.

El arancel judicial constituirá un ingreso público a favor del Sector Jurisdiccional de la Rama Judicial.

Artículo 4°. *Hecho generador.* El arancel judicial se genera en todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, con las excepciones previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en la presente ley.

Artículo 5°. *Excepciones.* No podrá cobrarse arancel en los procesos arbitrales, de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, procesos liquidatorios, de insolvencia, de jurisdicción voluntaria, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de acciones de tutela, populares, de grupo, de cumplimiento y demás acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público, salvo las que pertenezcan al sector financiero o que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de

Colombia, sin importar su naturaleza jurídica y los colectores de activos públicos señalados como tales en la ley cuando sean causahabientes de obligaciones dinerarias de alguna entidad del sector financiero.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandante sea un particular, se causará y pagará el arancel judicial de acuerdo con las reglas generales previstas en la presente ley. Sin embargo, en caso de que prosperen total o parcialmente las pretensiones, el juez ordenará en la sentencia que ponga fin al proceso la devolución, total o parcial, del arancel judicial y dará aplicación al parágrafo 1° del artículo 8° de esta ley.

En los casos en que el demandante sea una persona natural de los niveles de Sisbén 1, 2 o 3 o con amparo de pobreza, el pago del arancel judicial estará a cargo del demandado y encido en el proceso. En este caso, la base gravable serán las condenas económicas decretadas en la sentencia. El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar. Las personas pertenecientes a los niveles de Sisbén 1, 2 o 3 acreditarán su condición con el respectivo carné.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandado sea un particular, se aplicará la misma regla prevista en el inciso anterior para las personas de los niveles de Sisbén 1, 2 o 3 con amparo de pobreza.

Cuando se demande ante una autoridad administrativa en ejercicio de función jurisdiccional en aquellos asuntos en los que esta y el juez tengan competencia a prevención para conocer de la actuación, el arancel judicial se causará a favor de la autoridad administrativa respectiva.

Parágrafo 1°. Quien utilice información o documentación falsa o adulterada, o que a través de cualquier otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas en el presente artículo, deberá cancelar, a título de sanción, un arancel judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sanciones penales que hubiere lugar.

Parágrafo 2°. En las sucesiones procesales en las que el causante hubiere estado exceptuado del pago del arancel judicial, será obligatorio su pago, salvo que el causahabiente, por la misma u otra condición, se encuentre eximido. El juez no podrá admitir al sucesor procesal sin que este hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 6°. *Sujeto pasivo.* El arancel judicial está a cargo del demandante inicial, del demandante en reconvención, o de quien presenta una demanda acumulada en procesos con pretensiones dinerarias. De la misma manera, estará a cargo del llamante en garantía, del denunciante del pleito, del *ad excludendum*, del que inicie un incidente de liquidación de perjuicios cuando no se trate del mismo demandante que pagó el arancel al presentar la demanda y de todo aquel que ejerza una pretensión dineraria.

El accionante al momento de presentar su demanda deberá cancelar el arancel judicial y deberá anexar a su demanda el correspondiente comprobante de pago. En

caso de no pagar, no acreditar su pago o hacer un pago parcial del arancel judicial, su demanda será inadmitida en los términos del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.

El juez estará obligado a controlar que el arancel judicial se haya pagado de acuerdo con lo establecido en la ley o que la persona o el proceso se encuentren exonerados de pagar el arancel judicial, de lo cual dejará constancia en el auto admisorio de la demanda.

El arancel se tendrá en cuenta al momento de liquidar las costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes. Al momento de liquidar las costas solo se tendrá en cuenta el valor indexado del arancel judicial, excluyendo del mismo las sanciones previstas en el parágrafo 1° del artículo 5° de la presente ley.

Parágrafo 1°. En caso de litisconsorcio necesario, el pago del arancel podrá ser realizado por uno cualquiera de los litisconsortes. La misma regla se aplicará a los litisconsortes cuasinecesarios. Si el litisconsorcio es facultativo, cada uno de los litisconsortes deberá pagar el arancel judicial. En los eventos de coadyuvancia o llamamiento de oficio, no se causará el arancel.

Parágrafo 2°. Si en cualquier etapa del proceso se establece que no se ha pagado total o parcialmente el arancel judicial, el juez realizará el requerimiento respectivo para que se cancele en el término de cinco (5) días, so pena de aplicar las consecuencias previstas para el desistimiento tácito, la perención o cualquier otra forma de terminación anormal del proceso, según el estatuto procesal aplicable.

Artículo 7°. *B ase gravable*. El arancel judicial se calculará sobre las pretensiones dinerarias de la demanda o de cualquier otro trámite que incorpore pretensiones dinerarias.

Cuando en la demanda se incorporen varias pretensiones dinerarias, todas ellas deberán sumarse con el fin de calcular el valor del arancel judicial. Las pretensiones dinerarias que incorporen frutos, intereses, multas, perjuicios, sanciones, mejoras o similares se calcularán a la fecha de presentación de la demanda.

Las pretensiones dinerarias expresadas en salarios mínimos legales mensuales, en moneda extranjera o cualquier otra unidad de valor, deberán liquidarse, para efectos del pago del arancel judicial, a la fecha de presentación de la demanda.

Artículo 8°. *Tarifa*. La tarifa del arancel judicial es del uno punto cinco por ciento (1.5%) de la base gravable.

Parágrafo 1°. Las sumas pagadas por concepto de arancel judicial serán objeto de devolución al demandante, en el evento en que el juez de única, primera o segunda instancia no cumpla con los términos procesales fijados en la ley en relación con la duración máxima de los procesos, de conformidad con lo establecido en las normas procesales.

El trámite de devolución del arancel judicial podrá realizarse, a solicitud del sujeto pasivo que realizó el pago, mediante el reembolso directo o mediante la entrega de

certificados de devolución de arancel judicial que serán títulos valores a la orden, transferibles, destinados a pagar los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en los términos que establezca el Gobierno Nacional.

La emisión y entrega de los certificados de devolución de arancel judicial la efectuará la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, de acuerdo con el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, adoptará los procedimientos que considere necesarios a fin de autorizar y controlar el pago de los Impuestos Nacionales con los Certificados de Devolución de Arancel Judicial.

Parágrafo 2°. Cuando la demanda no fuere tramitada por rechazo de la misma en los términos establecidos en la ley procesal, el juez en el auto correspondiente ordenará desglosar el comprobante de pago, con el fin de que el demandante pueda hacerlo valer al momento de presentar nuevamente la demanda.

Artículo 9°. *Pago.* Toda suma a pagar por concepto de arancel judicial, deberá hacerse a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura ¿o la entidad que haga sus veces¿, Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, según lo reglamente el Consejo Superior de la Judicatura.

Una vez ejecutoriada la providencia que imponga pago del arancel judicial, se remitirá copia de la misma al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.

Toda providencia ejecutoriada que imponga el pago del arancel judicial presta mérito ejecutivo.

Las sumas adeudadas por concepto del arancel judicial a que se refiere esta ley, serán considerados créditos de primera clase, en los términos del artículo 2495 del Código Civil.

Parágrafo. Para efectos del pago y recaudo de que trata el inciso 1° de este artículo, el Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces podrá recaudar total o parcialmente el arancel judicial a través de los bancos y demás entidades financieras para lo cual señalará los requisitos exigidos para la autorización y establecerá los convenios que estime pertinente, aplicado en lo que corresponda el artículo 801 del Estatuto Tributario.

Artículo 10. *Falta disciplinaria.* Todos los procesos deberán recibir un mismo trato en cuanto a su trámite e impulso. Constituye falta disciplinaria gravísima del juez, retrasar, sin justificación, la tramitación de los procesos en los que no se causa arancel.

Artículo 11. *Destinación, vigencia y recaudo.* Destínense los recursos recaudados por concepto de arancel judicial de que trata la presente ley para la descongestión de los despachos judiciales y la implementación del sistema oral a nivel nacional. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, tendrá la facultad

de administrar, gestionar y recaudar el mismo, sin perjuicio de que el recaudo se realice a través del sistema financiero.

Los recursos deberán priorizarse para atender los planes de implementación de las disposiciones previstas en los estatutos procesales que establecen la tramitación de procesos en forma oral y por audiencias en la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa en donde se causan los recursos del arancel judicial.

Parágrafo. De los recursos del arancel judicial se destinará hasta el diez por ciento (10%) para la jurisdicción especial indígena. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, en enero de cada año, informará a la Mesa permanente de concertación indígena el valor total recaudado por concepto de arancel judicial.

Artículo 12. *Seguimiento.* Dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, el Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, deberá rendir un informe al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, acerca de las sumas recaudadas por concepto de arancel judicial, su destino y el empleo en programas de descongestión de la Administración de Justicia, e implementación de la oralidad en los procedimientos judiciales.

Artículo 13. *Régimen de transición.* El Arancel Judicial de que trata la presente ley se generará a partir de su vigencia y sólo se aplicará a los procesos cuyas demandas se presenten con posterioridad a la vigencia de esta ley.

Las demandas presentadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se registrarán por las disposiciones previstas en la Ley 1394 de 2010 y estarán obligadas al pago del arancel judicial en los términos allí previstos.

Artículo 14. *Vigencia y derogatorias.* La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga la Ley 1394 de 2010, salvo para los efectos previstos en el artículo anterior, así como todas las disposiciones que le sean contrarias.

Honorables Senadores,

Gabriel Zapata Correa,

Honorable Senador de la República,
Ponente.

Bogotá, D. C., 23 de mayo de 2012.

En la fecha se recibió ponencia y texto propuesto para segundo debate del Proyecto de ley número 224 de 2011 Senado, 019 de 2011 de Cámara, *por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones.*

El Secretario General,

Rafael Oyola Ordosgoitia.

Autorizo la publicación de la siguiente ponencia y texto propuesto para segundo debate, consta de treinta y cuatro (34) folios.

El Secretario General,

Rafael Oyola Ordosgoitia.

**TEXTO APROBADO EN COMISIÓN TERCERA DEL SENADO EN SESIÓN
DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2012, AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE
2012 SENADO, 019 DE 2011 CÁMARA**

por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. *Gratuidad de la justicia.* La Administración de Justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley.

Artículo 2°. *Naturaleza jurídica.* El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de inversión de la Administración de Justicia.

Los recursos recaudados con ocasión del arancel judicial serán administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia.

Parágrafo. La partida presupuestal que anualmente asigna el Gobierno Nacional al sector jurisdiccional no podrá ser objeto, en ningún caso, de recorte, so pretexto de la existencia de los recursos recaudados por concepto de arancel.

Artículo 3°. *Sujeto activo.* El arancel judicial se causa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.

El arancel judicial constituirá un ingreso público a favor de la Rama Judicial.

Artículo 4°. *Hecho generador.* El arancel judicial se genera en todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, con las excepciones de la presente ley.

Artículo 5°. *Excepciones.* No podrá cobrarse arancel en los procedimientos arbitrales, de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la acción de tutela y demás acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público, salvo las entidades públicas que pertenezcan al sector financiero o que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin importar su naturaleza jurídica y los colectores de activos públicos señalados como tales en la ley.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandante sea un particular, se causará y pagará el arancel judicial de

acuerdo con las reglas generales previstas en la presente ley. Sin embargo, en caso de que prosperen total o parcialmente las pretensiones, el juez ordenará en la sentencia que ponga fin al proceso la devolución, total o parcial, del arancel judicial.

En los casos en que el demandante sea una persona natural de los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 o con amparo de pobreza, el pago del arancel judicial estará a cargo del demandado vencido en el proceso. En este caso, la base gravable serán las condenas económicas decretadas en la sentencia. El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar. Las personas pertenecientes a los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 acreditarán su condición con el respectivo carné.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandado sea un particular, se aplicará la misma regla prevista en el inciso anterior para las personas de los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 con amparo de pobreza.

Parágrafo 1°. Quien utilice información o documentación falsa o adulterada, o que a través de cualquier otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas en el presente artículo, deberá cancelar, a título de sanción, un arancel judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

Parágrafo 2°. En las sucesiones procesales en las que el causante hubiere estado exceptuado del pago del arancel judicial, será obligatorio su pago, salvo que el causahabiente, por la misma u otra condición, se encuentre eximido. El juez no podrá admitir al sucesor procesal sin que este hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 6°. *Sujeto pasivo.* El arancel judicial está a cargo del demandante inicial o del demandante en reconvenición en procesos con pretensiones dinerarias. De la misma manera, estará a cargo del llamante en garantía, del denunciante del pleito, del *ad excludendum*, y de todo aquel que ejerza una pretensión dineraria.

El accionante al momento de presentar su demanda deberá cancelar el arancel judicial y deberá anexar a su demanda el correspondiente comprobante de pago. En caso de no pagar, no acreditar su pago o hacer un pago parcial del arancel judicial, su demanda será inadmitida en los términos del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.

El juez estará obligado a controlar que el arancel judicial se haya pagado de acuerdo con lo establecido en la ley o que la persona o el proceso se encuentren exonerados de pagar el arancel judicial, de lo cual dejará constancia en el auto admisorio de la demanda.

El arancel se tendrá en cuenta al momento de liquidar las costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes. Al momento de liquidar las costas solo se tendrá en cuenta el valor del arancel judicial, excluyendo del mismo las sanciones previstas en el parágrafo 1° del artículo 5° de la presente ley.

Artículo 7°. *Base gravable*. El arancel judicial se calculará sobre las pretensiones dinerarias de la demanda o de cualquier otro trámite que incorpore pretensiones dinerarias.

Cuando en la demanda se incorporen varias pretensiones dinerarias, todas ellas deberán sumarse con el fin de calcular el valor del arancel judicial. Las pretensiones dinerarias que incorporen frutos, intereses, multas, perjuicios, sanciones, mejoras o similares se calcularán a la fecha de presentación de la demanda.

Las pretensiones dinerarias expresadas en salarios mínimos legales mensuales, en moneda extranjera o cualquier otra unidad de valor, deberán liquidarse, para efectos del pago del arancel judicial, a la fecha de presentación de la demanda.

Artículo 8°. *Tarifa*. La tarifa del arancel judicial es del uno punto cinco por ciento (1.5%) de la base gravable.

Parágrafo 1°. Las sumas pagadas por concepto de arancel judicial serán objeto de devolución al demandante, en el evento en que el juez de única, primera o segunda instancia no cumpla con los términos procesales fijados en la ley en relación con la duración máxima de los procesos.

El trámite de devolución del arancel judicial podrá realizarse, a solicitud del sujeto pasivo que realizó el pago, mediante el reembolso directo o mediante la entrega de certificados de devolución de arancel judicial que serán títulos valores a la orden, transferibles, destinados a pagar los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en los términos que establezca el Gobierno Nacional.

La emisión y entrega de los certificados de devolución de arancel judicial la efectuará la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, de acuerdo con el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, adoptará los procedimientos que considere necesarios a fin de autorizar y controlar el pago de los Impuestos Nacionales con los Certificados de Devolución de Arancel Judicial.

Parágrafo 2°. Cuando la demanda no fuere tramitada por rechazo de la misma en los términos establecidos en la ley procesal, el juez en el auto correspondiente ordenará desglosar el comprobante de pago, con el fin de que el demandante pueda hacerlo valer al momento de presentar nuevamente la demanda.

Artículo 9°. *Pago*. Toda suma a pagar por concepto de arancel judicial, deberá hacerse a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura - Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, según lo reglamente el Consejo Superior de la Judicatura.

Una vez ejecutoriada la providencia que imponga pago del arancel judicial, se remitirá copia de la misma al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.

Toda providencia ejecutoriada que imponga el pago del arancel judicial presta mérito ejecutivo.

Las sumas adeudadas por concepto del arancel judicial a que se refiere esta ley, serán considerados créditos de primera clase, en los términos del artículo 2495 del Código Civil.

Parágrafo. Para efectos del pago y recaudo de que trata el inciso 1° de este artículo, el Consejo Superior de la Judicatura podrá recaudar total o parcialmente el arancel judicial a través de los bancos y demás entidades financieras para lo cual señalará los requisitos exigidos para la autorización y establecerá los convenios que estime pertinente, aplicado en lo que corresponda el artículo 801 del Estatuto Tributario.

Artículo 10. *Falta disciplinaria.* Todos los procesos deberán recibir un mismo trato en cuanto a su trámite e impulso. Constituye falta disciplinaria gravísima del juez, retrasar, sin justificación, la tramitación de los procesos en los que no se causa arancel.

Artículo 11. *Destinación, vigencia y recaudo.* Destínense los recursos recaudados por concepto de arancel judicial de que trata la presente ley para la descongestión de los despachos judiciales y la implementación del sistema oral a nivel nacional. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, tendrá la facultad de administrar, gestionar y recaudar el mismo, sin perjuicio de que el recaudo se realice a través del sistema financiero.

Parágrafo. De los recursos del arancel judicial se destinará hasta el diez por ciento (10%) para la jurisdicción especial indígena. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, en enero de cada año, informará a la Mesa permanente de concertación indígena el valor total recaudado por concepto de arancel judicial.

Artículo 12. *Seguimiento.* Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, deberá rendir un informe al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, acerca de las sumas recaudadas por concepto de arancel judicial, su destino y el empleo en programas de descongestión de la Administración de Justicia, e implementación de la oralidad en los procedimientos judiciales.

Artículo 13. *Régimen de transición.* El Arancel Judicial de que trata la presente ley se generará a partir de su vigencia y sólo se aplicará a los procesos cuyas demandas se presenten con posterioridad a la vigencia de esta ley.

Las demandas presentadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 1394 de 2010 y estarán obligadas al pago del arancel judicial en los términos allí previstos.

Artículo 14. *Vigencia y derogatorias.* La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga la Ley 1394 de 2010, así como todas las disposiciones que le sean contrarias.

SENADO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., 16 de mayo de 2012

En sesión de la fecha se le dio lectura a la proposición con que termina el informe para primer debate del Proyecto de ley número 224 de 2012 Senado, 019 de 2011 Cámara, *por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones*. Una vez aprobada la proposición, la Presidencia sometió a consideración el articulado conciliado y presentado por los ponentes, siendo aprobado con modificaciones. La Comisión de esta forma declara aprobado en su primer debate el proyecto mencionado. Acta número 016 de 16 de mayo de 2012. Anunciado el día 15 de mayo de 2012. Acta número 15 de la misma fecha.

El Ponente,

Gabriel Zapata Correa.

El Presidente,

Bernardo Elías Vidal.

El Secretario,

Rafael Oyola Ordosgoitia